
ACCIÓN DE TUTELA

Mocoa, 9 de julio de 2021

Señor
Juez Civil del Circuito. (Reparto)
Mocoa - Putumayo
E. S. D.

Accionante **ALEXANDER ADOLFO GUERRERO JACANAMEJOY**
Accionada Registraduría Nacional del Estado Civil representada en los
Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Putumayo.

ALEXANDER ADOLFO GUERRERO JACANAMEJOY, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 18.127.626 expedida en Mocoa, domiciliado y residente en el municipio de Mocoa - Putumayo, por medio del presente escrito me permito formular ante usted **ACCIÓN DE TUTELA**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 de la Constitución Política y demás normas concordantes con el fin de lograr el amparo constitucional de los derechos fundamentales a **LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO A LA IGUALDAD, AL TRABAJO, LIBRE ESCOGENCIA DE PROFESIÓN U OFICIO y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD**, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil representada en los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Putumayo, conforme se relata en los siguientes:

HECHOS

1º. Los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en Putumayo emitieron la Resolución 244 del 30 de junio de 2021 “Por la cual se convoca al proceso de selección para proveer unos empleos con carácter de supernumerario del nivel asistencial”, en la cual nos manifiesta que uno de los requisitos mínimos de inscripción a la convocatoria es **“tener entre 18 y 28 años cumplidos al momento de la inscripción”**.

Resolución que vulnera flagrantemente la Constitución Nacional y Ley.

2º. Los requisitos exigidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en la Resolución 244 del 30 de junio del año en curso va en contra vía de lo estipulado en la Ley 931 de 2004 y en especial con lo consagrado artículo 2 el cual nos dice que:

“Artículo 2º. Prohibición. Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado, podrá exigir a los aspirantes a ocupar un cargo o ejercer un trabajo, **cumplir**

con un rango de edad determinado para ser tenido en cuenta en la decisión que defina la aprobación de su aspiración laboral.

Los requisitos para acceder a un cargo que se encuentre vacante o a ejercer un trabajo deberán referirse a méritos o calidades de experiencia, profesión u ocupación". (negritas y subrayado mío)

Igualmente, el Artículo 3 de la citada norma nos manifiesta que:

“Artículo 3°. Razones de equidad. A partir de la vigencia de la presente ley, los reglamentos que contemplen restricciones de edad para acceder a un cargo o empleo o un trabajo deberán ser modificados, con el propósito de eliminar esta o cualquier otra limitante que no garantice condiciones de equidad, razones que deberán ser promovidas entre todos los trabajadores. De igual forma, las convocatorias públicas o privadas no podrán contemplar limitantes de edad, sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión u opinión política o filosófica”.

La ley prevé la protección de las personas en poder concursar a un empleo en igualdad de condiciones, solo siendo resaltadas para tal puesto, los propios méritos obtenidos mediante la formación y experiencia, constituyéndose en indicadores a medir a la hora de definir un determinado cargo, incurrir en penalizaciones por motivos ajenos a los planteados, es infringir no solo la ley, sino los tratados internacionales establecidos para evitar la discriminación laboral.

3°. El actuar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, va en contravía de la Constitución Nacional y vulneran mis derechos en especial los derechos fundamentales a **LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO A LA IGUALDAD, AL TRABAJO, LIBRE ESCOGENCIA DE PROFESION U OFICIO y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD**, porque al no permitirme participar en la convocatoria donde se van a proveer unos empleos con carácter de supernumerario del nivel asistencial se está limitando el ejercicio de mis derechos lo que genera un desconocimiento de las condiciones dignas y justas que el Estado Colombiano debe garantizar.

De acuerdo con lo manifestado se evidencia que existe un desinterés por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil de vincular a personas mayores a los 29 años de edad, generando así una brecha entre quienes pueden asumir productivamente una plaza de trabajo, pero por motivos de discriminación quedan a la deriva en el sector desempleo, esto implica pérdidas no solo desde el punto de vista social, sino económico para el país, por cuanto parte de su población activa queda al margen de producir por el hecho discriminatorio.

4° Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he formulado acción de tutela por los hechos relatados.

DERECHO

Los anteriores hechos constituyen una violación y/o amenaza por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Putumayo.

a mis derechos fundamentales de **ALEXANDER ADOLFO GUERRERO JACANAMEJOY**, a **LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO A LA IGUALDAD, AL TRABAJO, LIBRE ESCOGENCIA DE PROFESION U OFICIO y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD** porque:

1º. LA DIGNIDAD HUMANA lo encontramos relacionado en el Artículo 5 de la Constitución Nacional, y de acuerdo a la Corte Constitucional en su Sentencia T-291-16 es “entendido como derecho fundamental autónomo, la Corte ha determinado que la dignidad humana equivale: (i) al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia SU677-17 nos manifiesta que “Las razones para fundamentar la resolución de este caso no pueden ignorar el enfoque de género sin sacrificar elementos esenciales de nuestra Carta Política. En efecto, Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto a la dignidad humana (art. 1 superior) que reconoce y garantiza la igualdad. En particular el art. 13 de la Carta Política establece que “El Estado proveerá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.

2º. DERECHO A LA IGUALDAD se encuentra plasmado en el artículo 13 de la Constitución Nacional, y en el caso particular la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-770 de 2012 nos dice que:

“el derecho a la igualdad en sus dos dimensiones: en primer lugar, refiere a la **igualdad formal**, que prohíbe la discriminación y prevé que todos los individuos deben ser tratados con la misma consideración y reconocimiento. En este sentido, es deber del Estado abstenerse de concebir normas, diseñar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas, o adoptar decisiones e interpretaciones del Derecho, que conduzcan a agravar o perpetuar la situación de exclusión, marginación o discriminación de grupos tradicionalmente desventajados en la sociedad.

En segundo lugar, se establece la **igualdad en sentido material**, que tiene como finalidad superar las desigualdades que afrontan las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, o que soportan ciertos grupos que son tradicionalmente discriminados o marginados. De ahí que surja la obligación del Estado de tomar medidas para conseguir que estas personas, que se encuentran en una situación distinta a las demás, estén en condiciones de igualdad en dignidad y derechos.”.

En este orden de ideas, la igualdad en el sentido general, es una obligación a cargo del Estado; en este caso, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe crear medidas dirigidas a eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico; en el caso concreto la edad para participar en la convocatoria donde se van a proveer unos empleos con carácter de supernumerario del nivel asistencia.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-811 de 2000 manifiesta que:

“derecho a la igualdad se ve vulnerado cuando la sociedad o el Estado dan un trato distinto a una persona o a un grupo de personas, con base en características o diferencias respecto de otros grupos que, no justifican tales distinciones. De lo anterior se deduce que existen situaciones ante las cuales las diferencias en el trato están plenamente justificadas dentro del ordenamiento y otras que no lo están. Ello depende, en primera medida, de que la distinción -como medio- sea adecuada y razonable para lograr la finalidad que se persigue y, en segunda medida, de que la finalidad que se pretenda a través de la discriminación, esté o no justificada por el ordenamiento.

Por otra parte, en cuanto al derecho a la igualdad de oportunidades, las formas de discriminación mencionadas por la anterior jurisprudencia, al ser prejuicios contra una persona, afectan la imagen que los terceros tengan respecto de sus verdaderas capacidades y aún más, en ocasiones llegan a impedir el desarrollo de las mismas. En estos casos, entonces, en la medida en que la discriminación afecta la imagen social de una persona y su posibilidad de continuarse desarrollando autónomamente como persona, pueden constituir, además, vulneraciones de los derechos al buen nombre, a la honra y al libre desarrollo de la personalidad”.

Por otro lado, con la expedición por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la Resolución 244 del 30 de junio del año en curso vulneran el Bloque de Constitucionalidad y los acuerdos o Pactos Internacionales que defienden el Derecho a la Igualdad y procuran por la no discriminación es así que encontramos los siguientes:

Ámbito universal

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 3 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto

Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

Artículo 2

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 3 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

4. Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (OIT, Convenio 111, 1958)

Artículo 1 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.

Sistema Interamericano

1. Carta de la OEA

Artículo 3 Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: l) Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.

Artículo 45 Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica...

2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres (1948)

Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

3º. DERECHO AL TRABAJO, lo encontremos en el artículo 25 de la Constitución Nacional, y en el caso particular la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-611/01 nos dice que:

“El derecho al trabajo tiene una doble dimensión: individual y colectiva, reconocida en la Constitución. El aspecto individual se refiere a la facultad que tiene toda persona de elegir y ejercer profesión u oficio en condiciones dignas y justas. En la dimensión colectiva implica un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo porque de lo contrario el ejercicio del derecho al trabajo se convierte en una simple expectativa”.

4º. DERECHO A LA LIBRE ESCOGENCIA DE PROFESION U OFICIO consagrado en el artículo 26 de la Constitución Nacional al respecto la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-811/00 nos dice que:

“Se permite a las autoridades legalmente constituidas exigir requisitos de idoneidad, a quienes aspiran a ejercer ciertas profesiones u oficios. Estos requisitos pueden exigirse antes de otorgar el título que les permite desempeñarlos o, durante el ejercicio de la

profesión. A su vez, la idoneidad puede referirse a condiciones académicas, éticas o de seguridad, cuando se trate de profesiones u oficios en los cuales esté en riesgo la confianza pública. Sin embargo, la facultad estatal de exigir determinados requisitos de idoneidad, en la medida en que limita el ejercicio de derechos fundamentales, está sometida a su vez, a ciertas restricciones, en aras de la protección de los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, los requisitos de idoneidad deben ser adecuados y razonables, y estar encaminados a proteger valores y bienes que, dentro de la jerarquía constitucional, tengan un nivel, al menos igual al del derecho a la libre escogencia de profesión u oficio.”.

Así mismo, mediante Sentencia T-475 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz la Honorable Corte Constitucional, refiriéndose al fundamento del derecho a escoger libremente profesión u oficio, expresó:

“5. El trabajo es un supuesto elemental de una existencia digna y del desarrollo de la personalidad. El hombre adquiere reconocimiento de sí y frente a los otros mediante el trabajo. La dignificación de la persona humana como ser pensante, creativo y necesitado de reconocimiento se realiza en no poca medida mediante el ejercicio de una actividad laboral. La personalidad se forma y desarrolla en la práctica de la reproducción material y simbólica de la vida. **Para que este proceso sea plenamente libre y permita la realización individual y social, el ordenamiento jurídico resguarda un espacio fundamental al derecho al libre desarrollo de la personalidad.** La creciente intervención del Estado en la esfera de la personalidad, - principalmente por la complejidad de la vida económica, el desempleo, el desarrollo de la tecnología, el marginamiento y la pobreza - ha llevado al constituyente a consagrar y proteger este derecho fundamental de aplicación inmediata.”

5º. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Expresado en el Artículo 16 de la Constitución Nacional y al respecto la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-811/00 nos dice que:

“**La categoría jurídica de la libertad de escoger o elegir libremente la profesión, el arte, la ocupación o el oficio,** que consagra el artículo 26 de la Constitución Nacional, emana de la libertad general de actuar y **constituye una de las manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad.** Nadie puede imponer a una persona el ejercicio de una ocupación habitual, ni impedirle el desarrollo de la actividad laboral que corresponda a sus conocimientos o a sus dotes”.

MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCION DE DERECHOS

PRIMERO: Se declare como medida provisional la suspensión temporal del proceso de selección para la vinculación de personal supernumerario que apoyará el proceso electoral de Consejos Municipales y Locales de Juventud emitida mediante la Resolución 244 del 30 de junio del presente año, por parte de los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Putumayo, hasta que su Despacho resuelva de fondo la presente acción

PETICION DE TUTELA

PRIMERO: Se declare que la Registraduría Nacional del Estado Civil representadas en los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Putumayo ha vulnerado los derechos de **ALEXANDER ADOLFO GUERRERO JACANAMEJOY** a **LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO A LA IGUALDAD, AL TRABAJO, LIBRE ESCOGENCIA DE PROFESION U OFICIO y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.**

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil representada en los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Putumayo, que en un término de 12 horas realizar la modificación de la Resolución 244 del 30 de junio del presente año, para que el procedimiento de vinculación de personal supernumerario que apoyará el proceso electoral de Consejos Municipales y Locales de Juventud se realice sin limitante de edad de acuerdo con lo estipulado en la en la Constitución Nacional y en particular en la Ley 931 del 30 de diciembre de 2004.

TERCERO: Remitir el presente asunto al Ministerio de Protección Social, con el fin de adelantar el trámite sancionatorio de acuerdo a su competencia previsto en los artículos 4 y 5 Ley 931 del 30 de diciembre de 2004.

COMPETENCIA

Según el Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado de Circuito de Mocoa-Putumayo, es competente para conocer la tutela por corresponder al lugar de residencia de la accionante a quien se le ha vulnerado sus derechos, objeto de esta solicitud.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he presentado hasta la fecha, solicitud ante otra autoridad con identidad de violación y derecho reclamado.

PRUEBAS

Solicito señor juez, se decreten, practiquen y tengan como pruebas las siguientes:

Pruebas Documentales

1. Copia cedula de ciudadanía 18.127.626 perteneciente al señor **ALEXANDER ADOLFO GUERRERO JACANAMEJOY** como accionante.
2. Copia de la Resolución 244 del 30 de junio de 2021 emitida por los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Putumayo “Por la cual se convoca al proceso de selección para proveer unos empleos con carácter de supernumerario del nivel asistencial”,

NOTIFICACIONES

Los accionados:

- La Registraduria Nacional del Estado Civil, Avenida Calle 26 # 51-50 CAN (Bogotá – Colombia) Telefono (571)2202880.
- Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Putumayo, Avenida Colombia 16-56 Mocoa - Putumayo. Telefono 4295156.

El accionante:

Las recibiré en la ciudad de Mocoa - Putumayo o al correo electrónico guerreroalex583@gmail.com

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ALEXANDER ADOLFO GUERRERO JACANAMEJOY

C.C. N° 18.127.626 de Mocoa Putumayo

Celular: 3219747859

***REPÚBLICA DE COLOMBIA**
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NÚMERO **18.127.626**


GUERRERO JACANAMEJOY

APELLIDOS

ALEXANDER ADOLFO

NOMBRES


FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **22-AGO-1977**

MOCOA
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

04-OCT-1996 MOCOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO



A-6400100-01031011-M-0018127626-20180810 0062261731A 1 9905209673